

En algunos crímenes, los jóvenes son enterrados en estos cañaduzales. Luego de unas semanas, los asesinos llaman a las familias para decirles dónde están los cuerpos de sus seres queridos. FOTO: LUIS ROBAYO. AFP

Los cañaduzales del horror en la frontera suroriental de Cali

Al menos 13 jóvenes han sido enterrados en estos terrenos luego de ser torturados y asesinados. Entre las víctimas están los cinco menores de Llano Verde.

CAROLINA BOHÓRQUEZ - CORRESPONSAL DE EL TIEMPO - CALI | @car49655116

La franja de más de nueve kilómetros de cañaduzales, donde se unen dos de las comunas más violentas de Cali, es una especie de camposanto donde terminan enterrados los cuerpos de desaparecidos, la mayoría de ellos menores de edad y jóvenes.

Estos cañaduzales bordean la frontera del suroriente de Cali con el corregimiento de Navarro, una frontera de muerte y terror que está en inmediaciones de un antiguo depósito de basuras.

Parece otra ciudad. Según la lideresa Francia Márquez, la principal característica del sector es la marginalidad. El barrio Llano Verde, donde se cometió la masacre de los cinco menores que conmocionó a todo el país, hace parte de esta zona de peligrosidad. Luego del crimen, que ocurrió el 11 de agosto, se capturó a dos personas, que no aceptaron cargos, y se busca a un tercer sospechoso, identificado como Gabriel Bejarano, alias Mono, quien tendría supuestos vínculos con grupos armados organizados y dos condenas por tráfico de armas, delitos por los que tenía casa por cárcel.

En este gigantesco cordón de cañaduzales también llegan escombros de asentamientos, como El Valladito. Fue allí, por ejemplo, donde la hermana de un joven de 20 años que estuvo desaparecido desde el pasado 28 de agosto desenterró su cuerpo, a punta de pico y pala.

La muerte de esta víctima, identificada como Jeison Illera, es un misterio. Su hermana, Diana Illera, dijo que los familiares no entienden por qué lo mataron. Solo recibieron una llamada anónima indicándoles dónde podían encontrar el cuerpo de Jeison.

"Me dirigí a todas partes. No entiendo por qué no podían conseguir una retroexcavadora para poder encontrarlo", recalcó.

En este mismo terreno fueron semienterrados en 2017 los restos de una adolescente de 16 años que vivía a kilómetro y medio. Su cuerpo fue hallado desmembrado y con una herida en el tórax. Al igual que la familia de Jeison, la familia de la menor recibió una llamada en la que les informaron del asesinato y dónde estaba su cuerpo para recogerlo.

La Policía señaló que detrás de este macabro hallazgo estuvo la banda 'los Rakas' o 'JZ', organización dedicada a asesinatos a sueldo, extorsiones y desplazamientos forzados en la comuna 15, que corresponde a Llano Verde.

La comuna 15 se volvió tan temida que, con la comuna 13, tiene los mayores índices de homicidios en Cali. Allí se superó la tasa nacional de homicidios, según la Policía. En Colombia, en el primer semestre de 2020 hubo 23,31 muertes violentas con armas por cada 100.000 habitantes.

Asusta que desde que comenzó este año hasta el pasado miércoles 16 de septiembre, como lo informó la Secretaría de Seguridad de Cali, la comuna 15, con 129.000 habitantes, alcanzó 73 homicidios y el año pasado, en el mismo lapso, hubo 97 reportes. Además, la comuna 15 ostenta el más alto número de homicidios de menores en Cali. La cifra superó los 10 casos hasta agosto, de un total de 28 en toda la ciudad.

'Los Rakas' también fueron señalados de un atentado con granada en una vivienda de la misma comuna, donde murió un menor de 13 años, en 2017. Al continuar el análisis de esta ola de crímenes, cuyas víctimas son enterradas o asesinadas en cañaduzales, la cuenta viene de más atrás.

En marzo de este año se hallaron cinco cuerpos de jóvenes. Dos meses después, en la comuna 21, en el otro extremo de ese cinturón de caña, la Policía encontró un cuerpo incinerado.

En la comuna 21 van 56 homicidios este año. En el mismo período de 2019 se contabilizaron 68 homicidios en este sector.

En todos estos crímenes, la Fiscalía busca determinar si hay bandas armadas que tendrían alianzas con escuadrones de la muerte organizados y narcotraficantes, quienes utilizan un corredor desde el oriente de Cali hasta el llamado 'triángulo de la marihuana', como denominan a los municipios de Miranda, Toribío y Corinto, en Cauca. Desde Llano Verde hasta estos pueblos solo hay una hora de trayecto en carro.

Mientras tanto, según la Policía, se vienen dando golpes a las bandas de la comuna 15. En el último año se capturaron 37 integrantes de 'los Haitianos' y 'los Rakas', dedicados a homicidios, torturas, extorsiones y tráfico de drogas. Estos grupos, además, instrumentalizan a menores, dotándolos de armas para infundir más terror en la zona.

Luto en el Cauca por masacre de seis jóvenes

Con ráfagas de fusil y granadas fue atacado ayer un grupo de jóvenes que departía en una gallera de la vereda Munchique, en Buenos Aires, Cauca. La acción armada dejó al menos seis personas muertas.

"Rechazamos de manera rotunda estos hechos de barbarie que hoy golpean a nuestra comunidad", expresó el alcalde de Buenos Aires, Óscar Edwin López.

El general Marco Mayorga, comandante de la Tercera División del Ejército, señaló que en ese sector delinque la estructura 'Jaime Martínez', disidencia de las Farc, "a quien de forma preliminar se le puede atribuir la autoría, aunque no debemos descartar otras hipótesis".

La Defensoría del Pueblo también rechazó lo ocurrido y recordó que mediante una alerta temprana emitida el pasado 30 de abril, en la que se documentaba un caso similar contra tres personas que fueron asesinadas en un billar, habían advertido que estos hechos violentos podían repetirse.

Aunque el alcalde habla de seis muertos, líderes de la zona señalan que habría más fallecidos, teniendo en cuenta que hay heridos de consideración. Las víctimas fueron identificadas como Juan Mancilla, Kevin Caicedo, Víctor Caicedo, Juan Salinas, John Barrado y Harrison Balanta.

Según Indepaz, el crimen de ayer es la masacre número 60 de este año, las cuales se han cobrado la vida de 244 personas. Cauca, señaló el informe, es uno de los departamentos más azotados por estos hechos delictivos, con nueve masacres en este 2020.

Popayán

BREVES NOTICIAS DEL PAÍS



Fiscalía

Capturado contratista

Entre los capturados por convocar y estimular, desde diferentes centros educativos, acciones vandálicas y de alteración del orden público, como las del 9 de septiembre, fue identificado Miguel Andrés Parga, alias el Profe. Según la Fiscalía él es contratista del Departamento Administrativo de Prosperidad Social, desde el gobierno de Juan Manuel Santos, tal como lo confirmó la misma entidad a través de un comunicado. Parga se desempeñaba como técnico administrativo. FOTO: SANTIAGO SALDARRIAGA

ELN

Atentado contra el oleoducto Caño Limón

Según el Ejército, este fin de semana se registró un atentado contra el oleoducto Caño Limón Coveñas, en el departamento de Arauca. La acción terrorista fue atribuida a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln). El hecho ocurrió en la vereda Playas del Bojabá, zona rural del municipio de Saravena, denunciaron campesinos de la zona.

Pandemia

Se ha invertido 11 % del PIB en ayudas

El presidente Iván Duque aseguró que durante la pandemia se les ha llevado ayuda financiera a más de 10 millones de familias y se han asignado recursos que equivalen al 11 por ciento del PIB. Los recursos se han girado a través de programas sociales como Familias en Acción.



JHON TORRES
Editor de EL TIEMPO
@JhonTorresET

EN EL OJO DE LA JUSTICIA

Le llegó el momento del 'destape' a la JEP

La semana pasada, con un comunicado de apenas cinco líneas, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le anunció al país que se decidió a empezar a andar el camino que muchos esperaban que siguiera desde sus inicios, hace ya tres años: que las versiones de los victimarios que quieren pena alternativa para crímenes cometidos en el conflicto sean públicas.

La decisión se refiere por ahora al caso 07, de reclutamiento forzado de menores, y llega tras un largo debate que termina por zanjarse a fuerza de realidades: el uso de términos blandos para referirse a su prontuario en la guerra –retención en vez de secuestro, por ejemplo– y la filtración parcial de las declaraciones de los exjefes de las Farc le están pasando una dura cuenta de cobro a la legitimidad del proceso de paz. A tal punto que ahora las cabezas del partido Farc optaron por pedirle a la JEP que haga públicas sus versiones.

Luego de todo esto, el viernes pasado, los colombianos pudimos ver en vivo y en directo la declaración del hoy senador Carlos Antonio Lozada sobre por qué las Farc reclutaron a miles de niños –la misma JEP habla de al menos 17.000 víctimas– a lo largo de cinco décadas de violencia.

En un ambiente político que sigue enormemente polarizado frente a la negociación con la antigua guerrilla más grande del país es clave dar todos los pasos que permitan demostrarles a los críticos y a los escépticos que la apuesta por la paz negociada fue la correcta.

Y después de varios años de muchas expectativas, resultados aún pocos y escándalos como el del caso 'Santrich', a la JEP le llegó hace rato el momento de enviar las señales correctas y quitarles argumentos a los que le han criticado el exceso de garantismo hacia los procesados.

De ahí la importancia del primer paso que se ha dado, aunque aún insuficiente, con la apertura –si se quiere, el destape– de las audiencias.

La verdad plena de los crímenes que cometieron en el conflicto es un compromiso que tienen los victimarios para recibir los beneficios. Y esa verdad debe ser pública cuando se trata de una justicia transicional en la que el pleno y abierto reconocimiento de las conductas perpetradas es parte fundamental de la reparación de las víctimas.

Hasta ahora, la decisión de la JEP había sido mantener la reserva de las audiencias, en contravía de las lecciones de otros países del mundo que ya recorrieron ese camino (Sudáfrica, por ejemplo) y del antecedente nada desdeñable de Justicia y Paz, la justicia transicional que siguió al proceso de negociación con los paramilitares en la década pasada.

Por supuesto, habrá informaciones sensibles –especialmente aquellas que puedan dar lugar a revictimización– que merezcan algún grado de reserva. Pero la apertura de las actuaciones de la JEP tendrá sin duda más impactos a favor que peros.

No solo porque permitirá que el país pueda ver que la nueva justicia para la paz avanza en el cumplimiento de los objetivos para los que fue creada, sino porque –como pasó en el proceso con los 'paras'– las declaraciones públicas de los victimarios estarán a la mano, susceptibles de verificación y, cuando toque, de denuncia de incumplimiento del compromiso de verdad plena a cambio de no cárcel.